



CRONOLOGÍA DE LA PROTESTA SOCIAL

PROTESTAS

BASE DE DATOS DE ACCIONES COLECTIVAS

ABRIL 2020

COSTA RICA



**UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA**

IIS Instituto de
Investigaciones
Sociales

 **ELABORACIÓN:**

Comité de Seguimiento y Análisis de la Protesta Social y la Acción Colectiva

AUTORES:

Alejandro Alvarado Alcáza, Sofía Cortés Sequeira y Ronald Sáenz Leandro

FUENTES:

La Nación, La Extra, crhoy.com, SocialismoHoy

▲ INTRODUCCIÓN

Desde el año 2003, el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) en un trabajo conjunto con el programa Estado de la Nación inició con un proceso de discusión, diseño y elaboración de insumos para el seguimiento y análisis de la protesta social, en el cual se incluían la construcción de una base de datos de noticias sobre acciones colectivas, un manual de codificación de categorías sobre las distintas acciones colectivas, y ponencias para el capítulo sobre “Fortalecimiento de la Democracia” de los informes del programa. Posteriormente, en el año 2008, se constituyó, en el IIS, en colaboración con el OSAL-CLACSO¹, el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Costa Rica, bajo la cual se prepararon las cronologías del conflicto social y los informes de coyuntura, como un insumo tanto para el seguimiento como para el análisis de la protesta social en Costa Rica. Desde finales de 2012, el IIS continuó con la producción de las cronologías mensuales, como una línea institucional en miras de propiciar el estudio de los conflictos sociales en el territorio costarricense. En esta dirección, las cronologías del conflicto social se producen usando como fuentes de registro de acciones colectivas, distintos medios de comunicación de prensa escrita. Por medio de resúmenes de las distintas expresiones de la protesta social, estas pretenden contribuir en el análisis, reflexión y debate entre círculos académicos, organizaciones sociales y políticas y movimientos sociales en general.

1 El Observatorio Social de América Latina-Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, es un programa iniciado en el año 2000 para el “análisis crítico del capitalismo latinoamericano, los procesos políticos, sociales y económicos emergentes y las diversas formas de los conflictos y movimientos sociales en la región”. Entre las áreas de trabajo de este programa, se encontraban los comités de seguimiento y análisis del conflicto social y la coyuntura, los cuales funcionaron hasta finales de 2012, cuando fueron cerrados debido a problemas de financiamiento.

▲ **RESUMEN DE LA PROTESTA SOCIAL COSTA RICA ABRIL 2020**

Se incluye como insumo para el seguimiento y análisis de la protesta social en el país, un conjunto de tablas resumen sobre el comportamiento de las acciones colectivas cada mes. Se registra información resumida sobre los principales tipos de acción colectiva, actores colectivos y demandas registradas por los medios de comunicación consultados. Para la construcción de las categorías hemos tomado como punto de partida el manual de codificación elaborado en el IIS-UCR para la clasificación de las acciones colectivas. De esta manera, se presenta un panorama general, en números, de la protesta social costarricense mes a mes, como material complementario de la cronología de la protesta social.

▲ **TABLA 1. TIPOS DE ACCIÓN COLECTIVA. ABRIL 2020.**

Tipo de acción	Cantidad (relativos - %)	Cantidad (absolutos)
Declaración pública	45,3	24
Ciberacciones	18,9	10
Denuncia ante entidades nacionales o internacionales	11,3	6
Bloqueo	7,5	4
Concentración	7,5	4
Reunión con autoridades	7,5	4
Marcha	1,9	1
TOTAL	100	53

Fuente: Elaboración propia a partir de Alvarado, Cortés y Sáenz. 2020. Cronología de la protesta social Abril 2020. Costa Rica: IIS-UCR

TABLA 2. TIPOS DE ACTOR COLECTIVO. ABRIL 2020.

Tipo de acción	Cantidad (relativos - %)	Cantidad (absolutos)
GG. y OO. de trabajadores y trabajadoras	35,8	19
GG. y OO. de empresarios y empresarias	26,4	14
GG. y OO. de profesionales	13,2	7
GG. y OO. de vecinas y vecinos	7,5	4
GG. y OO. de ciudadanos y ciudadanas	5,7	3
GG. y OO. de pescadores y pescadoras	5,7	3
GG. y OO. de campesinas, campesinos y/o indígenas	3,8	2
GG. y OO. de derechos humanos	1,9	1
TOTAL	100	53

Fuente: Elaboración propia a partir de Alvarado, Cortés y Sáenz. 2020. Cronología de la protesta social Abril 2020. Costa Rica: IIS-UCR.

GG. y OO.* Grupos y/u organizaciones

TABLA 3. TIPOS DE DEMANDA. ABRIL 2020.

Tipo de acción	Cantidad (relativos - %)	Cantidad (absolutos)
Defensa de trabajo y condiciones laborales	22,6	12
En favor o en contra de leyes, reglamentos, planes o decretos	15,1	8
Intervención de gobierno	15,1	8
Defensa de la producción pesquera	5,7	3
Mejora y/o defensa de los servicios públicos	5,7	3
Fiscalización de la función pública y rendición de cuentas	3,8	2
Defensa de la producción agropecuaria	1,9	1
Defensa de los derechos humanos	1,9	1
Otros	28,3	15
Total	100	53

Fuente: Elaboración propia a partir de Alvarado, Cortés y Sáenz. 2020. Cronología de la protesta social Abril 2020. Costa Rica: IIS-UCR.

TABLA 4. TIPOS DE ENTIDAD. ABRIL 2020.

Tipo de acción	Cantidad (relativos - %)	Cantidad (absolutos)
Gobierno en general	41,5	22
Ministerios	17,0	9
Instituciones autónomas	11,3	6
Población en general	9,4	5
Presidencia de la República	5,7	3
Empresas privadas	3,8	2
Instituciones reguladoras	3,8	2
Poder legislativo	3,8	2
Jerarcas de instituciones públicas	1,9	1
Otros	1,9	1
Total	100	53

Fuente: Elaboración propia a partir de Alvarado, Cortés y Sáenz. 2020. Cronología de la protesta social Abril 2020. Costa Rica: IIS-UCR.

▲ **CRONOLOGÍA DE LA PROTESTA SOCIAL** **ABRIL 2020¹**

▲ **MIÉRCOLES 1**

Mediante un comunicado en sus redes sociales, el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica reprocha la celebración de un tope el fin de semana anterior en la comunidad de Bella Vista de Guápiles, por contrariar la disposición de no realizar actividades de este tipo, como medida para evitar el riesgo de contagio de COVID-19. Anuncian que no otorgarán ningún permiso para este tipo de actividades mientras se mantenga el estado de emergencia, e instan a la población a no violentar esta disposición.

Mediante una carta publicada en sus redes sociales, la Alianza Sindical del Poder Judicial manifiesta al presidente Carlos Alvarado su oposición a la propuesta gubernamental de imponer un nuevo impuesto a los salarios y pensiones, iguales o superiores al ₡1 100 000 en el marco de la crisis económica desatada por el impacto del COVID-19 en el país. La Alianza, conformada por el SITRAJUD, la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), el Sindicato de la Judicatura (SINDIJUD), el Sindicato de la Defensa Pública (SINDEPU) y el Sindicato de Profesionales y Técnicos en Contaduría, Finanzas y Afines del Poder Judicial (ASPROTECOFI), considera injusto e inoportuno que se cargue sobre la clase trabajadora asalariada y pensionada, el peso de la crisis que la pandemia está generando en el país, máxime cuando este sector ya fue golpeado de manera reciente con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

▲ **JUEVES 2**

Un grupo de personas desempleadas, pertenecientes al Movimiento de Trabajadoras y Trabajadores Desempleados, se manifiesta en las afueras del MTSS, en Barrio Tournón y Pérez Zeledón, para exigir que se les incluya en el pago del subsidio de desempleo, anunciado para las personas afectadas por la crisis económica originada por el COVID-19, pues no cuentan con los recursos económicos para cubrir los gastos básicos de sus familias. La Fuerza Pública se hace presente en el lugar para velar que las personas cumplan con las medidas sanitarias, como el uso de mascarillas y mantener una distancia mínima de dos metros entre cada una. La ministra de Trabajo atiende a un grupo de representantes del movimiento.

Mediante una carta enviada al presidente Carlos Alvarado, el SINAME y el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, solicitan presentar una propuesta a la Asamblea Legislativa para suspender el libre tránsito y la libertad de reunión en Costa Rica hasta por 30 días, como medida preventiva para evitar contagios masivos de COVID-19, ante el aumento de casos en el territorio nacional.

El SINAME presenta un recurso de amparo contra la CCSS, ya que considera que no está implementando todas

¹ Cómo citar este documento: Alvarado, A.; Cortés, S. y Sáenz, R. 2020. Costa Rica Cronología de la protesta social Abril 2020. San José: IIS-UCR. Disponible en <http://www.protestas.iis.ucr.ac.cr/publicaciones/cronologias>

las acciones necesarias, ni cuenta con el equipo suficiente, para proteger al personal de salud de un posible contagio de COVID-19 en los centros de trabajo.

El Comité Cívico Somos Bagaces envía una serie de cartas al Ministerio de Salud, a la Defensoría de los Habitantes y a la CGR, para denunciar la falta de agua potable en sus comunidades, a raíz de la contaminación con arsénico, problemática que enfrentan desde hace varios años. Los y las vecinas de Bagaces exigen una solución pronta al problema, y contar con un suministro adecuado de agua potable, limpia y libre de contaminación por parte del AyA.

Mediante un comunicado, la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) manifiesta su apoyo a las medidas solicitadas por la UCCAEP al gobierno de Carlos Alvarado, para atender la crisis económica generada por el COVID-19. Estas incluyen la suspensión temporal, parcial o total de las jornadas de trabajo en el sector público, la derogatoria del decreto de salario escolar, la reducción temporal de tarifas de los servicios públicos y combustibles, la mejora en el financiamiento para rescatar a las empresas, y promover en la agenda legislativa sólo aquellos proyectos que contribuyan con la inversión, la reactivación económica y la generación de empleo. Esteban Acón, presidente de la CCC, urge al gobierno a reducir de manera inmediata el gasto y el aparato estatal, con acciones concretas como la venta de activos públicos y el cierre de instituciones obsoletas o redundantes.

La Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable, espacio que aglutina alrededor de 18 organizaciones de pescadores y pescadoras, denuncia una actitud pasiva de parte del ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado y del presidente ejecutivo del Incopesca, Daniel Carrasco, quienes a la fecha no han presentado un plan para atender el impacto que ya está teniendo la crisis desatada por el COVID-19 en el sector pesquero. Exigen una pronta intervención del gobierno de Carlos Alvarado para esbozar soluciones posibles a la crisis que afecta a las comunidades costeras.

▲ VIERNES 3

Un grupo de comerciantes y empresarios turísticos de las comunidades del Caribe Sur, realiza un video, que se divulga por redes sociales, solicitando a las personas no vacacionar en sus territorios durante Semana Santa ante el riesgo de contagio de COVID-19. Solicitan a la población en general quedarse en sus casas.

Un grupo de representantes del gremio de taxistas solicita al CTP ser exonerados del segundo y tercer tracto del canon de marchamo 2020, luego de que en diciembre anterior el INS avalara que los taxistas paguen el canon del marchamo en tres tractos, siendo el primero el que cancelaron en su derecho de circulación. La solicitud se basa en la crítica situación que enfrentan producto de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Un grupo de indígenas del sur del país, mediante una carta dirigida al viceministro de Diálogo, Randall Otárola, solicitan ayuda al gobierno de Carlos Alvarado ante la crisis sanitaria y económica desatada por el COVID-19. Denuncian que las ayudas que el gobierno anunció para sus territorios no han llegado a muchas

de las personas que las necesitan. Thais Vidal, abogada indígena, denuncia un abandono estatal hacia las poblaciones autóctonas.

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica eleva una carta de protesta al gerente médico de la CCSS, Mario Ruiz Castillo, para exigir que no se limite el uso de mascarillas quirúrgicas o cubrebocas entre el personal de salud durante la alerta sanitaria del COVID-19, esto en reacción a una directriz girada al personal que trabaja en consulta externa y en otras áreas catalogadas de baja transmisión, en la que se les indica que no utilicen dichos implementos de protección.

Un grupo de personas en estado de indigencia se manifiesta afuera de la Casa Presidencial para exigir al gobierno de Carlos Alvarado ayuda para enfrentar la crisis sanitaria desatada por el COVID-19. Denuncian que las instituciones que les brindan comida o alojamiento temporal están cerradas debido a las medidas de aislamiento social impuestas por el Ministerio de Salud. Temen que por vivir a la intemperie puedan contagiarse con mayor facilidad del nuevo virus. La manifestación es acompañada por la Fundación Caminando en Fe, que brinda alimento y ropas a las personas en estado de indigencia, y solicita apoyo económico para poder seguir ayudando a esta población. Los y las manifestantes portan carteles con leyendas como: "El gobierno dice: "Quédate en casa". No tengo casa."

▲ SÁBADO 4

Un grupo de vecinos y vecinas de Paquera bloquea la salida de automóviles del Ferry de Puntarenas-Paquera, para impedir el ingreso de turistas y personas que no residan en la zona, como medida para evitar que se propague el contagio de COVID-19 en sus comunidades. Únicamente permiten pasar vehículos de transporte de alimentos y bebidas.

Mediante una carta dirigida al presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya, la Unión Médica Nacional (UMN) exige a la CCSS más transparencia sobre las cifras del personal de salud contagiado de COVID-19, o en aislamiento domiciliario preventivo. La UMN considera que estas cifras deben ser de dominio público, ya que podrían reflejar una deficiencia en la implementación de equipos de protección personal en los diferentes centros de salud del país. Instan de manera urgente a la CCSS a distribuir equipos de protección a todo el personal de salud.

La Asociación Costarricense de Agencias de Viajes emite un comunicado en reacción a la propuesta del MEIC, para que se proceda a la devolución total del dinero a quienes tengan paquetes de viajes contratados que se hayan cancelado a causa del COVID-19. Para la asociación, esta medida no es viable en las actuales condiciones económicas del sector turístico. En su lugar, las agencias agremiadas se comprometen a entregar a sus clientes notas de crédito por los servicios contratados, siendo este un documento que le asegura al cliente la posibilidad de trasladar su viaje a fechas futuras y la garantía de recibir el servicio contratado cuando se haya superado la crisis.

▲ DOMINGO 5

Por segundo día consecutivo, un grupo de vecinos y vecinas de Paquera bloquea la salida de automóviles del Ferry de Puntarenas-Paquera, para impedir el ingreso de turistas y personas que no residan en la zona, como medida para evitar que se propague el contagio de COVID-19 en sus comunidades. Únicamente permiten pasar vehículos de transporte de alimentos y bebidas.

Mediante un comunicado, la CANATUR hace un llamado a toda la población a no visitar las playas nacionales durante la Semana Santa como medida para evitar un contagio masivo de COVID-19 en el país, esto a pesar de que el sector turístico vive una de las crisis más grandes de las últimas décadas.

▲ LUNES 6

Mediante una conferencia de prensa virtual, el presidente de la UCCAEP, Álvaro Sáenz, cuestiona la forma en que el Ministerio de Trabajo atiende la crisis de empleo generada por el impacto del COVID-19 en el país, ya que considera que exigen trámites excesivos y su gestión es muy lenta. Propone recortar las jornadas y salarios de las personas trabajadoras del sector público, para atender las necesidades de las personas desempleadas en el sector privado. Denuncia que una parte del sector público “está en su casa sin hacer nada y aun así están percibiendo su salario completo”, actitud que califica de poco solidaria para con quienes han perdido sus empleos.

Mediante un comunicado en sus redes sociales, la ANFE denuncia que la Policía de Tránsito maneja de manera descontrolada y descoordinada todo lo relacionado con la restricción vehicular sanitaria. Denuncian que estos ponen multas a las personas aun cuando estas portan cartas emitidas por las empresas que certifican que están trasladándose de sus centros de trabajo a sus hogares. Consideran que es indispensable la existencia de una coordinación entre la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito para que las personas que cumplan con su jornada laboral puedan desplazarse sin ningún contratiempo o inconveniente.

La Asociación Costarricense de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (ASCORL) envía un oficio al gerente médico de la CCSS, Mario Ruiz, para expresar su preocupación ante la alta vulnerabilidad de contagio de COVID-19 que tienen como profesionales de la salud, motivo por el cual le solicitan la entrega de los insumos de protección adecuados para ejercer su profesión de forma segura.

La Asociación Costarricense de Médicos Emergenciólogos envía una nota de preocupación al Colegio de Médicos por la poca protección que tienen sus agremiados y agremiadas para combatir el COVID-19. Solicitan que se haga cumplir de inmediato el artículo 180 del Código de Ética de dicho Colegio, que dice textualmente: “El médico tiene derecho a abstenerse de ejercer su profesión en instituciones públicas o privadas en donde las condiciones de ambiente y trabajo no sean las adecuadas para salvaguardar su salud y seguridad y dar un buen servicio”.

Mediante un video en sus redes sociales, el vocero del Sector Pesquero Nacional, Mauricio González, denuncia que no han recibido ninguna respuesta del gobierno de Carlos Alvarado ante las propuestas que le plantearon para enfrentar la crisis que vive su sector a raíz del impacto del COVID-19 en el país, que ha implicado un descenso de hasta el 50% en los precios de sus productos. Señala que las familias pesqueras de las provincias de Guanacaste, Limón y Puntarenas necesitan de acciones gubernamentales urgentes para poder satisfacer sus necesidades básicas, tales como la alimentación.

▲ **MARTES 7**

El Sindicato del Ministerio de Hacienda (SINDHAC) ejerce un derecho de respuesta, por medio de sus redes sociales, a las declaraciones del presidente de la UCCAEP, Álvaro Sáenz, quien afirmó que una buena parte de las personas trabajadoras del sector público se está ganando el salario sin trabajar, lo que establece una injusticia con respecto a las personas despedidas en el sector privado. Denisse Ballesteros, secretaria general del sindicato, refuta las declaraciones de Sáenz y afirma que en el sector público no están “de vagos” ni de asueto, sino que están trabajando de manera remota en sus casas. Recalca además que el sector público no recibirá su aumento salarial anual, lo que ya contribuye a aportar recursos para la crisis.

▲ **MIÉRCOLES 8**

En un documento dirigido al gobierno de Carlos Alvarado, la Federación Nacional de Cámaras de Comercio y Asociaciones Empresariales (FEDECÁMARAS) plantea una serie de propuestas ante la afectación que sufren sus agremiados por la crisis del COVID-19. En este, instan a todas las municipalidades del país a que el cobro de patentes y tasas municipales sea condonado hasta el final de la emergencia, y tomar en cuenta seis meses más de recuperación de los negocios. Instan a la Asamblea Legislativa a que únicamente se tramiten los proyectos de ley de alivio y reactivación económica, seguridad ciudadana, sanidad y empleo. De igual manera dirigen solicitudes hacia el MEIC, el Banco Central, el MTSS, y la CCSS.

▲ **MIÉRCOLES 15**

En un comunicado, la Academia Nacional de Ciencias pide al MINSA recomendar el uso generalizado de mascarillas industriales o artesanales para todas aquellas personas que circulen en espacios públicos, abiertos o cerrados. La preocupación de la Academia se manifiesta ante la cantidad de personas en las calles después de Semana Santa, ya que este comportamiento contraviene varias de las recomendaciones sanitarias para cortar las cadenas de transmisión del COVID-19.

Un grupo de taxistas informales bloquea el paso en los alrededores de Sabana Sur como protesta ante las directrices de restricción vehicular emitidas por el MINSA. La manifestación culmina en un enfrentamiento

con oficiales de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito. Las imágenes exponen la detención de varios de los individuos con los que hay intercambio de agresiones físicas.

En una carta dirigida a las y los diputados de la Asamblea Legislativa, alcaldes y alcaldesas de varios gobiernos locales del país piden excluir a las municipalidades de la regla fiscal para la atención de la emergencia por el COVID-19. La petición se da ante una propuesta que se contempla en un proyecto de ley presentado por la diputada María José Corrales y apoyado por la UNGL y la ANAI. La propuesta de eximir tanto a los gobiernos locales como a los Comités Cantonales de Deportes es porque estos se incluyen en el artículo 11 del proyecto de “Ley para Apoyar al Contribuyente Local y Reforzar la Gestión Financiera de las Municipalidades ante la Emergencia Nacional por la Pandemia de COVID-19”. En este caso, la iniciativa busca que los ayuntamientos incrementen el monto establecido del impuesto sobre bienes inmuebles para destinar en rubros administrativos.

▲ JUEVES 16

En un comunicado, el IPLEX critica la modalidad implementada por el gobierno durante las conferencias de prensa para anunciar el estado de la emergencia por el COVID-19. La organización señala que no hay aspectos que diferencien estas ruedas de prensa de un acto meramente de rendición de cuentas por parte del gobierno, cuestionando que el Poder Ejecutivo no permita la presencia de periodistas, ni siquiera de forma virtual, cosa necesaria para pedir una aclaración o incluso repreguntar tras las respuestas de los jefes. El instituto aboga porque el gobierno implemente medidas que garanticen la transparencia y la atención personalizada inmediata a los periodistas, ya sea vía telefónica u otro medio.

Públicamente, el SINTRAJAP solicita la destitución de Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de la JAPDEVA, argumentando el incumplimiento de una serie de funciones. Entre otras cosas, denuncian la falta de insumos sanitarios para la protección de las personas trabajadoras ante el COVID-19, el retraso en el nombramiento de un médico y en el pago de las jubilaciones para el personal que decidió anticipar su retiro. Asimismo, el SINTRAJAP señala a Centeno por los efectos que su gestión ha tenido sobre el funcionamiento de los puertos y, en general, las condiciones laborales y económicas.

▲ VIERNES 17

En un comunicado, la UCCAEP le solicita al gobierno y a la Asamblea Legislativa analizar el proyecto de ley que llevaría a una fijación en el precio de los combustibles por el COVID-19, para que el diésel quede fuera del cálculo. La organización empresarial afirma que dicha solicitud se centra en hacer un beneficio al bolsillo de los consumidores y sostienen que la coyuntura de los bajos precios en materia de combustibles debe aprovecharse para beneficiar a los más desposeídos. Algunos de los aspectos que reducirían, si se acoge la propuesta, son el costo de los transportes de carga, el servicio público y la producción agrícola.

El SINDEU envía una carta a Henning Jensen, rector de la UCR, para que no se les exija a sus agremiados tomar su periodo de vacaciones, pues aducen que esto va en contra de sus derechos laborales. Asimismo, elaboraron un documento para que sus agremiados presenten un recurso de revocatoria a la aplicación del rebajo del saldo de vacaciones. Desde el sindicato afirman que el hecho de que se obligue las personas trabajadoras a tomar el período de vacaciones como una alternativa para ayudar a las instituciones a acatar las medidas sanitarias dispuestas por el MINSA para enfrentar la situación de emergencia nacional por COVID-19, se enfrenta con derechos fundamentales de carácter constitucional e internacional de índole laboral.

Representantes de un grupo de familias campesinas del asentamiento Las Nubes, ubicado en Los Chiles, presentan una carta dirigida al presidente Alvarado y a otros jefes de gobierno, en el que solicitan su intermediación en el conflicto por tierras que enfrentan. Según denuncian, recientemente el BCR decidió la venta de la propiedad del asentamiento a una empresa productora de cítricos, pese a que la Ley No. 9036 establece en su artículo 44 que la banca estatal está en la obligación de ofrecer con carácter prioritario todas las tierras en sus manos al INDER. En el mismo documento, se indica que desde que inició el conflicto, las familias recurrieron al instituto precisamente amparados en el citado artículo 44, no obstante, el BCR continuó con el proceso de venta.

▲ **SÁBADO 18**

En un comunicado, el SEC critica el presupuesto extraordinario que el gobierno envía al Congreso para atender la emergencia por el COVID-19. El gremio afirma que le preocupa que la mayoría de ese presupuesto se encuentra destinado al pago de deuda externa y considera que la prioridad debe ser única y exclusivamente hacer frente a los gastos que genera el sistema de salud pública y solventar las necesidades apremiantes de los sectores más pobres del país.

▲ **LUNES 20**

En una reunión virtual con el presidente de la República, Carlos Alvarado, representantes de la CADEXCO, la UCCAEP y la CICR piden al gobierno la continuidad de los negocios, a su vez que iniciar un proceso de negociación conjunta para encontrar las soluciones en la coyuntura de crisis por la pandemia del COVID-19. Además, buscan la colaboración del gobierno para elevar una propuesta al BCIE para la implementación de buenas prácticas sanitarias en los lugares de trabajo, esto con el fin de convertir a Costa Rica en proyecto piloto para América Latina como ejemplo de apertura segura y progresiva de los negocios.

En un comunicado, la ODEC le exige al MEIC que permita que los expendedores de arroz puedan realizar el “bando” y otras ofertas a la hora de vender las bolsas del producto, como un medio para ayudar a las familias. En este sentido, solicita específicamente la derogación de un artículo del Decreto Ejecutivo 38884-MEIC que indica explícitamente la prohibición de realizar bandeos (bolsas de arroz con regalías para los consumidores

generalmente atados con una cinta adhesiva), sorteos, promociones, ofertas y otras similares. Según el grupo, la fijación del precio del arroz y la prohibición de hacer ofertas prohíbe a los consumidores acceder a mejores precios y productos, alegando un daño indirecto a los sectores más desfavorecidos por la crisis del COVID-19.

▲ **MARTES 21**

Durante una reunión virtual con Carlos Alvarado, presidente de la República, representantes de la Cámara de Comercio de Costa Rica urgen al gobierno a reiniciar las actividades económicas tras semanas de paralización debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Asimismo, la cámara solicita que se contemplen medidas de apoyo financiero, particularmente para los sectores de pequeñas y medianas empresas y que se tomen acciones en materia de gasto público.

Tras la detección de un primer caso de COVID-19 en un oficial penitenciario, la UNT solicita al MJP implementar una serie de medidas para proteger a las personas trabajadoras y a la población de los centros penitenciarios. En concreto, el sindicato solicita que se fijen protocolos sanitarios rigurosos, que se garanticen los materiales sanitarios para el personal carcelario. También piden la suspensión de las requisas.

▲ **MIÉRCOLES 22**

La AmCham también urge al gobierno de la República a tomar medidas que permitan retomar las actividades económicas en el país. En primer término, la cámara pide la aplicación de pruebas masivas para la detección de casos de COVID-19. También se manifiesta en contra de cualquier tipo de impuestos.

Mediante una nota dirigida al presidente Carlos Alvarado y a las y los diputados, la CTRN solicita una mayor reducción en el margen de las tasas de interés que se permitirá cobrar a las entidades financieras que concedan créditos. La petición de este sindicato se enmarca en la discusión que transcurre en el congreso en relación con la votación del proyecto de Ley No. 20861 que precisamente busca regular las llamadas tasas de usura. Para la CTRN, medidas de este tipo resultan incluso más urgentes en el marco de la crisis ocasionada por el COVID-19.

▲ **JUEVES 23**

En un comunicado de prensa, la CCC pide al gobierno de Carlos Alvarado considerar el impulso a la construcción de obras tales como acueductos, centros de educación y de salud, como parte de las medidas de reactivación económica que se contemplan para mitigar los efectos ocasionados por el COVID-19 en el país.

▲ VIERNES 24

Un grupo de personas se presenta en Casa Presidencial y hace entrega de un documento dirigido al presidente Alvarado en el que solicitan al gobierno apoyo para hacerle frente al pago de las pensiones alimentarias. En concreto, el grupo pide la suspensión de las medidas de apremio corporal para las personas que incumplan con el pago. También piden mecanismos de financiamiento por parte de la banca estatal o el IMAS, que les ayude a cubrir el pago, pues la crisis ocasionada por el COVID-19 ha impactado negativamente en sus ingresos.

▲ SÁBADO 25

Francisco Campos, secretario general del Sindicato Nacional de Conductores Especializados, solicita públicamente a la ARESEP la aplicación de una rebaja en las tarifas de la empresa Biusa, para cumplir con el mandato de la Sala Primera de reintegrar un monto cercano a los ₡15 millones, tras determinar que la empresa incurrió en un cobro de sumas de más a sus usuarios entre los años 2000 y 2003.

La Cooperativa de Molusqueros de Puntarenas manifiesta las dificultades que enfrenta el sector debido a las medidas sanitarias tomadas contra el COVID-19. Según indican, los productores de moluscos no consiguen colocar sus productos en el mercado, pues la mayoría se comerciaban en restaurantes, bares y marisquerías, muchos de los cuales permanecen parcial o totalmente cerrados. También indican que han experimentado muchos problemas para obtener apoyo por parte de instituciones como el IMAS.

▲ LUNES 27

Mediante una carta abierta dirigida al presidente Alvarado, el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, exhorta al mandatario a establecer una “concertación nacional” para construir las propuestas que posibiliten la reactivación económica tras los efectos ocasionados por el COVID-19 en el país. El documento señala que cualquier medida en materia económica requiere de la participación de todos los sectores desde las cámaras empresariales, las cuales sí han sido representadas, hasta los sindicatos y los colegios profesionales.

Personas trabajadoras dedicadas a la cosecha de naranjas para la empresa Del Oro, ubicada en el cantón Upala, en la frontera norte de Costa Rica, denuncian irregularidades en el cumplimiento de sus derechos laborales. Señalan que luego de contratarles, la empresa cambió los términos de la remuneración pasando de un pago semanal fijo a un por destajo. También indican que luego de que algunos exigieran que se pagara el salario mínimo, fueron despedidos y en su lugar contrataron a personas nicaragüenses a las que se les paga incluso menos salario. Asimismo, denuncian que el transporte que ofrece la empresa para su traslado no cumple con los lineamientos establecidos por el MINSA en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19.

La Junta de Internos Unidos del Centro de Atención Institucional de San José hace llegar una carta a Daniel Salas, ministro de Salud, y a otras autoridades de gobierno, solicitando que se reinstale la visita familiar para

las personas privadas de libertad que se encuentran en el centro. Debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el gobierno ordenó la suspensión de las visitas, medida que se ha mantenido durante casi dos meses. Ahora, las personas privadas de libertad manifiestan su compromiso con respetar todas las normas de higiene necesarias, mientras solicitan que la visita sea de una sola persona.

▲ **MARTES 28**

Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, cuestiona algunas de las medidas anunciadas por el gobierno como parte de las acciones para el retorno a las actividades económicas en el país. Particularmente, la cámara manifiesta dudas respecto de los criterios considerados para mantener las restricciones a la apertura de comercios durante los fines de semana. Lo mismo indica en relación con la restricción vehicular. Consideran que los comercios cumplen debidamente con las medidas sanitarias de lunes a viernes, por lo que no entienden por qué no podrían hacerlo durante los sábados y domingos. Asimismo, piden al gobierno considerar la posibilidad de que la restricción para la circulación de vehículos inicie a las 9 p.m. y no a las 7 p.m.

▲ **MIÉRCOLES 29**

La CCH se une a otros sectores empresariales en el llamado al gobierno para que retomen las actividades económicas. Este sector ha sido uno de los más golpeados por la crisis sanitaria, debido entre otras cosas, al cierre de fronteras y a la orden de cierres de este tipo de establecimientos. Entre las medidas concretas que solicitan se encuentra el retraso de la entrada en vigencia del cobro del IVA, el cual iniciaría a cobrarse en julio.

▲ **JUEVES 30**

Un grupo de transportistas de carga instala un bloqueo en la frontera de Peñas Blancas, punto limítrofe entre el país y Nicaragua. La molestia de este sector se relaciona con el plazo de 72 horas que el gobierno les otorga para proceder con el descargo de las mercancías y la salida de territorio costarricense, el cual consideran insuficiente. Debido a la protesta, autoridades de policía y de la Dirección de Aduanas sostienen un diálogo con los manifestantes para buscar una solución.

En el centro de San José, un grupo de habitantes del asentamiento Monte Alto, ubicado en Concepción, cantón Alajuelita, protesta para exigir la dotación de agua potable para su comunidad. Según denuncian, pese a las recomendaciones del MINSA para contrarrestar los posibles contagios de COVID-19, en su comunidad no cuentan con las condiciones sanitarias mínimas para cumplirlas, sobre todo el acceso a agua. Debido a esto exigen que el AyA instale pajas de agua. Durante la protesta, las y los manifestantes mantienen la distancia entre sí y se protegen con mascarillas.

▲ GLOSARIO DE SIGLAS

AmCham	Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio
ANAI	Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias
ANFE	Asociación Nacional de Fomento Económico
ARESEP	Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
AyA	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
BCR	Banco de Costa Rica
CADEXCO	Cámara de Exportadores de Costa Rica.
CANATUR	Cámara Nacional de Turismo
CCC	Cámara Costarricense de la Construcción
CCH	Cámara Costarricense de Hoteles
CCSS	Caja Costarricense del Seguro Social
CGR	Contraloría General de la República
CICR	Cámara de Industrias de Costa Rica
CTP	Consejo de Transporte Público
CTRN	Confederación de Trabajadores Rerum Novarum
IMAS	Instituto Mixto de Ayuda Social

INDER	Instituto de Desarrollo Rural
IPLEX	Instituto de Prensa y Libertad de Expresión
JAPDEVA	Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica
MEIC	Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica
MINSA	Ministerio de Salud
MJP	Ministerio de Justicia y Paz
MTSS	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
ODEC	Organización de Consumidores de Costa Rica
SEC	Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense
SINAME	Sindicato Nacional de Médicos Especialistas
SINDEU	Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica
SINTRAJAP	Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica
SITRAJUD	Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial
UCCAEP	Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado
UNGL	Unión Nacional de Gobiernos Locales
UNT	Unión Nacional de Trabajadores

ELABORACIÓN

Grupo de Trabajo PROTESTAS
Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad de Costa Rica

COORDINACIÓN:

Alejandro Alvarado Alcázar.

RELEVAMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN:

Alejandro Alvarado Alcázar, Sofía Cortés Sequeira y Ronald Sáenz Leandro

EDICIÓN:

Alejandro Alvarado Alcázar

DIAGRAMACIÓN:

Andrés Artavia Tencio

Fuentes: Diario Extra, La Nación, crhoy.com, SocialismoHoy



PROTESTAS

BASE DE DATOS DE ACCIONES COLECTIVAS

VISITE: WWW.PROTESTAS.IIS.UCR.AC.CR
CONTACTO: PROTESTAS.IIS@GMAIL.COM